

ACUERDO Nro. 443 /2022

En San Miguel de Tucumán, a los ¹⁵ días del mes
de ~~dicembre~~ del año dos mil veintidós; reunidos
los Sres. Consejeros del Consejo Asesor de la
Magistratura que suscriben, y

VISTO

La presentación del Abog. Pablo Alejandro Salomón en la que deduce impugnación
contra la calificación asignada a su prueba de oposición en el concurso n° 252 (Juzgado Civil
y Comercial Común de la I Nominación, Centro Judicial Capital); y,

CONSIDERANDO

I.- Impugna la calificación de ambos casos de su examen en virtud de las facultades
conferidas por el art. 43 del RICAM, por entender que media arbitrariedad manifiesta.

Se agravia de que se atribuya un mayor puntaje a unos rubros sobre otros (estilo,
fundamentación y solución jurídica), puesto que del artículo 39 del RICAM no se desprende
tal distinción. Manifiesta que la norma citada establece como aspecto a valorar la consistencia
de la solución jurídica y que el jurado al proponer una única solución se opone al espíritu y
a la letra de los criterios que deben tenerse en cuenta en la evaluación.

En lo que atañe al caso n° 1, refiere al modo en que fue calificado y cuestiona que en
el apartado respecto a estilo se le reprocha la repetición del texto de las resultas en los
considerandos, sobre lo que advierte no observarse coincidencia alguna entre ambas partes
de la sentencia. Compara su prueba con otra que presenta errores de tipeo, omisión de dejar
espacio después del punto y márgenes de primera línea de párrafo sumamente disimiles y sin
embargo se le asignan 6 puntos.

En segundo lugar, disiente con los 5 puntos asignados en el acápite relativo a
fundamentación y solución jurídica. Destaca que la competencia para elaborar una sentencia
judicial no debe apreciarse solamente respecto de un enunciado ficticio que no posee la
misma amplitud que la compulsa de un proceso completo con sus diferentes cuadernos de
pruebas. Tampoco estima que puede juzgarse merecedor de un mayor puntaje la mera
susplicia para suponer o adivinar hechos que deberían encontrarse claramente descriptos,
con ello entiende arbitrario penalizar su trabajo por supuestas interpretaciones erróneas de
hechos que no se encontraban claramente definidos, máxime si no se cuenta con la
posibilidad de efectuar preguntas o aclaraciones durante el examen, a diferencia de lo que
ocurriría con una sentencia real. Observa que en otros existen escasos párrafos sobre el
análisis jurídico y no obstante se les asignó una calificación superior por coincidir en el
rechazo de la acción.


Dra. MARIA SOFIA MACUL
SECRETARIA
CONSEJO ASESOR de la MAGISTRATURA

Destaca que la jurisprudencia que cita el dictamen (Sentencia n° 764 del 13/10/2020 de la CSJT) refiere al supuesto de carencia de plano de mensura y no al caso presentado en el cual sí fue agregada e incluso coincide con el objeto de la demanda y que resulta irrazonable pretender que tal instrumento se ajuste al resultado del proceso que el litigante no puede conocer ab initio y cita jurisprudencia local.

Replica que en el dictamen se le critica que no fijó la proporción de costas en la decisión sobre vencimientos recíprocos. Indica que practicó la regulación sobre la parte del terreno que prospera la acción. En relación a la regulación de emolumentos al perito ingeniero agrónomo manifiesta haber aplicado por analogía el porcentaje empleado por la ley de martilleros profesionales en una proporción mesurada.

Discrepa con el cuestionamiento de falta de mención a la inscripción del plano de mensura en el resuelve. Razona que ello no es parte esencial de la decisión, ni configura un requisito legal del Código Civil, el Código Procesal Civil y Comercial ni la Ley n° 14.159.

En lo que respecta al caso n° 2, se agravia de los 5 puntos conferidos en el acápite “Estilo” sobre un máximo de 7; de los 7 puntos por “Fundamentación” sobre un total de 8; y solamente 6 puntos por la “Solución jurídica”, cuando el máximo asciende a 10.

Sostiene que el jurado nuevamente le cuestiona la extensión del relato de los hechos, pese a no existir norma o canon alguno que imponga límites al respecto y teniendo en cuenta que cuanto mejor sea la descripción de la situación fáctica mayor utilidad tendrá el documento para los distintos operadores jurídicos.

Reprocha que el evaluador le señala que efectúa aclaraciones impropias de una sentencia pero sin indicar de cuáles se trataría, lo que lo coloca en estado de indefensión al respecto. No obstante aclara que de una lectura del proyecto de fallo no verifica ninguna aclaración improcedente.

Remarca que, contrariamente a lo referido por el tribunal, sí efectuó distinción entre poderes generales y especiales y transcribe pasajes donde aborda la temática. Reprocha que el jurado no haya explicado en el dictamen por qué resultaría errónea la referencia a los usos y costumbres en las escrituras públicas, afirmando el postulante haber aseverado que resulta frecuente observar en los poderes generales un listado de facultades quizá para despejar cualquier duda frente a una lectura restrictiva o carente de conocimiento a la cual se le asigna un carácter meramente ejemplificativo y que por tanto no requiere de una mención expresa.

Hace hincapié en el parámetro valorativo del artículo 39 del Reglamento referido a la “Consistencia” y no la mera “coincidencia” con la resolución que habría dictado el jurado.

Subraya que la imposición de costas al letrado del Banco que propone el evaluador no es frecuente en la práctica del fuero.

II.- Siendo formalmente admisible el recurso, se dio intervención al jurado evaluador en los términos del art. 43 del RICAM para que remita las explicaciones e informaciones que estime pertinentes al respecto. El tribunal, al responder la vista cursada, se manifestó en el siguiente tenor:

“Concursante Pablo A. Salomón

Cuestiona el concursante que los evaluadores hayan establecido determinados puntajes para cada uno de los rubros establecidos en el artículo 39, alegando que en el reglamento no se establece dicha escala, pero omitiendo considerar que tampoco lo prohíbe, y sin establecer de qué manera a su criterio, la evaluación podría haber distribuido los 55 puntos totales entre los dos casos, considerando, además, cada uno de los tres rubros que debía evaluar en cada caso. Alega que la evaluación, valora extremos ajenos a los criterios del art. 39 del reglamento, pretendiendo que la pertinencia y rigor de los fundamentos, no tenga nada que ver con la correcta interpretación de los hechos y su subsunción en el caso, o bien pretende que cualquier solución pueda considerarse válida, aunque vulnere las normas positivas, o la garantía de defensa en juicio, o en fin, realiza críticas genéricas que no termina de concretar. En suma, no indica en dónde pueda estar la arbitrariedad al dividir así el puntaje, ni tampoco se demuestra e invoca fundadamente arbitrariedad en el resto de sus críticas, con lo cual a tenor de lo dispuesto en el artículo 43 del reglamento, la impugnación in totum no debe prosperar. Yerra el postulante en afirmar que la solución jurídica pueda ser cualquiera, ya que debe ajustarse a los hechos y derecho aplicables. De haber propuesto una solución que resultara incluso más ajustada a derecho que la propuesta por los evaluadores, hubiera sido considerada. De hecho, la solución por él propuesta fue valorada positivamente, pero con disminución del puntaje, en atención a su falta de completividad, o bien, a las incongruencias dentro de la solución propuesta. Tampoco es cierto que no se hayan valorado otras soluciones, en la medida que fueran congruentes con los hechos.

Respecto al caso 1, código CPDHHXPE84, examen N° 7 no se advierte que los errores de estilo del concursante CPDHUCHH que él cita, sean mayores o similares que los del impugnante, y no lo demuestra, al punto que para ello se limita a cuestionar la falta de espacios, o evidentes errores de tipeo, errores en los que incurrieron todos los participantes. Respecto a la crítica que pretende rebatir, el que no se produzca repetición de textos en su elaboración, no implica que no sea incorrecto transcribir en los considerandos, lo que debió constar en las results. Respecto a la crítica de que se le pida que adivine hechos que no se encuentran claramente descriptos, resulta desafortunada, ya que los hechos necesarios para la resolución del pleito surgen claramente de las pruebas detalladas, con mayor claridad aún de las que normalmente surgen de un expediente real. A despecho de lo que afirma el impugnante, la interpretación de los hechos y su subsunción en la norma, es tarea esencial en la labor del juzgador, mucho más en uno que aspira a juez de primera instancia. El impugnante por otra parte, ni siquiera intenta rebatir los argumentos del dictamen referentes a su proyecto de sentencia, respecto a las omisiones, mal interpretación de los hechos, y errónea aplicación del derecho. Nuevamente yerra el impugnante al fundamentar que si indicó la proporción de costas impuestas. Ello no es correcto. Que haya regulado a cada abogado los honorarios por los cuales prosperó su acción, no implica per sé, que las costas


Dra. MARIA SOFIA MACUL
SECRETARIA
CONSEJO ASESOR de la Magistratura

se impongan en esa manera, máxime cuando en la regulación del abogado del demandado, que habría ganado en un 90 % de la superficie discutida, le regula en una proporción inferior a la del abogado ganador en un 10 %, como si hubiera perdido. Evidentemente, una sentencia así, sería pasible al menos de un recurso de aclaratoria. Por otra parte, el impugnante no explica por qué no regula honorarios a los abogados sobre la parte que resultaron perdidosos, como si no les correspondiera cobrar también por esa parte. Tampoco resulta acertada la explicación respecto al plano de mensura, ni la cita jurisprudencial se ajusta al presente caso, pues en una propiedad horizontal, no hay dudas en general sobre el objeto de la prescripción, en cambio en el presente caso, se habla de superficies de una mayor extensión, que sin duda es necesario determinar con un plano de mensura, que en el presente caso no existe, y por lo tanto, mal podría mandarse a inscribir en Catastro Parcelario. No es cierto por tanto que exista cosa determinada, en el presente caso, como erróneamente lo expone la sentencia propuesta.

Por todo ello, se recomienda mantener el puntaje asignado a este caso.

Respecto al caso 2, código PDUPLG, examen N° 12, el impugnante se queja de que en el rubro estilo, se valore negativamente el que se explaye en cuestiones innecesarias a los fines de la resolución interlocutoria. Que no exista norma o canon alguno, no implica que no exista un estilo propio de las sentencias y resoluciones judiciales. De no tenerse en cuenta, acabaríamos con sentencias o resoluciones que antes de pasar a analizar las cuestiones propuestas a resolución, optaran por hacer un repaso de la historia del derecho desde el Código de Hammurabi hasta nuestros días, o que se explayaran sobre cuestiones ya precluidas y no cuestionadas por las partes a los efectos de la resolución (como ocurre en este caso), abultando innecesariamente la extensión de resoluciones judiciales. Si el reglamento contempla evaluar el estilo y corrección del lenguaje, la extensión y corrección de lo que se redacta, es entonces materia pertinente a evaluar. Tampoco es cierto que se contradiga el criterio de la consigna. Si el caso se presentó con extensión, lo fue a los efectos de que el concursante pudiera y debiera evaluar cuáles hechos resultaba pertinente enunciar para el correcto dictado de la interlocutoria. Por lo demás, la interlocutoria propuesta, ni siquiera enuncia esos hechos (todo ellos, no solo los pertinentes) en las resultas, sino que los incorpora en los fundamentos, lo cual luce como técnicamente erróneo. Tampoco es correcto que el concursante hubiera hecho la distinción entre poderes generales y especiales, pues lo suyo es algo que dice al pasar. Las consideraciones sobre usos y costumbres no abordan la cuestión discutida, que era si el poder era suficiente para representar al banco en negocios distintos a los exclusivamente referidos al fideicomiso en cuestión, siendo obviamente negativa la solución. Referido a la crítica de que su solución, consistente a hacer lugar al recurso sin otorgar plazo sea igual de correcta que la propuesta por los evaluadores, no es cierto que sea totalmente congruente. No es la solución aceptada por la jurisprudencia de nuestros tribunales, no es la que respetaría la igualdad que debieran tener las partes en el proceso (si se admite dicha solución para el actor, que tuvo tiempo para

preparar sus poderes, con mayor razón debería aceptarse para el demandado, que no lo tuvo), no es la que garantizaría mejor el derecho de defensa en juicio, ni es por otra parte la solución receptada en el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán. En cuanto a la imposición de costas, no se entiende cómo podrían imponerse a quién, en principio (el banco demandado), no podía ser representado por el abogado. Si no hubo representación, entonces el banco, en principio, no estuvo en juicio, y por lo tanto, mal podría ser condenado. Por lo demás, la sentencia incurre en la incongruencia de imponerlas al banco en los considerandos, y al fiduciario en la parte resolutive, apareciendo al menos, contradictoria en ese sentido, ya que no queda claro si deberán recaer en el patrimonio fideicomitado, o bien en el patrimonio personal del banco.

Por lo expuesto, se aconseja mantener el puntaje asignado a este caso.”

III.- Debe señalarse previo a ingresar al tratamiento de la procedencia de la impugnación tentada, que en el marco de análisis determinado por el art. 43 del Reglamento Interno los recursos sólo podrán ser admitidos en tanto demuestren que se incurrió en arbitrariedad manifiesta en la valoración de los antecedentes o en la instancia de oposición, a la vez que no serán procedentes los que constituyan una simple expresión de disconformidad de los postulantes con el puntaje adjudicado.

Confrontados los cuestionamientos con la respuesta vertida por el jurado examinador antes transcripta, este Consejo comparte y adhiere a los fundamentos desarrollados en la referida presentación.

Al responder las aclaraciones solicitadas, el jurado ha dado los argumentos que sostienen la nota asignada y ha explicado los motivos por los cuales la calificación original debe mantenerse. Las razones invocadas en la respuesta antes reproducida lucen razonables en el marco de las potestades que le competen al evaluador.

La asignación de puntaje se efectuó sobre una valoración integral de cada examen en la que se ponderaron aspectos menos destacados con aristas sobresalientes siempre dentro del marco de cada prueba en particular, lo que impide comparaciones parcializadas entre textos. De allí que el método de réplica utilizado por el recurrente de comparación entre las correcciones de distintos exámenes para fundar su agravio deja al descubierto la mera discrepancia con el puntaje asignado sin lograr demostrar adecuadamente la existencia de un error material en la corrección del examen ni un ejercicio arbitrario de la potestad discrecional del jurado en orden a la asignación de puntaje a cada evaluación.

Así las cosas, analizando este Consejo Asesor de la Magistratura los fundamentos vertidos por el evaluador, cabe concluir que no surge de manera expresa que haya existido manifiesta arbitrariedad en la calificación asignada, la que cumple con la totalidad de los recaudos exigidos en el art. 39 del Reglamento Interno para su validez.

Por todo ello,



**EL CONSEJO ASESOR DE LA MAGISTRATURA DE TUCUMÁN
ACUERDA**

Artículo 1°: **NO HACER LUGAR** a la impugnación deducida por el concursante Pablo Alejandro Salomón contra la calificación de su prueba de oposición en el concurso n° 252 (Juzgado Civil y Comercial Común de la I Nominación, Centro Judicial Capital), conforme a lo considerado.

Artículo 2°: **NOTIFICAR** el presente al impugnante poniendo en su conocimiento que resulta irrecurrible a tenor de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento Interno del Consejo Asesor de la Magistratura y **DAR A PUBLICIDAD** en la página *web*.

Artículo 3°: De forma.

LEG. RAUL ALBARRACÍN
CONSEJERO TITULAR
CONSEJO ASESOR DE LA MAGISTRATURA

DR. LUIS JOSE COSSIO
CONSEJERO SUPLENTE
CONSEJO ASESOR DE LA MAGISTRATURA

DR. JORGE C. MARTINEZ
CONSEJERO TITULAR
CONSEJO ASESOR DE LA MAGISTRATURA

ANTE MI DOY FE

Dra. MARIA SOFIA NACUL
SECRETARIA
CONSEJO ASESOR DE LA MAGISTRATURA

Dr. DANIEL OSCAR POSSE
PRESIDENTE
CONSEJO ASESOR DE LA MAGISTRATURA